

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

RADICACIÓN : 110013110027202100220-00
ACCIONANTE : JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS
ACCIONADO : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ASUNTO : TUTELA

JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA

Bogotá D.C, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda en relación con la acción de tutela promovida por JOAN SEBASTIÁN MARQUEZ ROJAS contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

I. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Relata el interesado que en calidad de liquidador de la de la sociedad Triventi Ingeniería S.A.S., presentó solicitud el 12 de febrero hogaño con base en lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, sin que a la fecha tuviera respuesta de su pedimento.

II. PETICIÓN

Ordenar a la accionada resolver de fondo su solicitud.

III. DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS

El accionante considera vulnerado el derecho de petición.

IV. PRUEBAS

Auto de la Superintendencia de Sociedades, acta de posesión del accionante como liquidador dela sociedad Triventi Ingeniería S.A.S, petición suscrita por el accionante con constancia de envío, certificado de cámara y comercio de Triventi Ingeniería S.A.S – en Liquidación Judicial. Respuesta de la accionada.

V. TRÁMITE

Dispuesto el reparto electrónico del asunto este despacho proveyó sobre su trámite, ordenó la conformación de carpeta virtual, admitió las diligencias ordenando la notificación a la accionada y se le concedió el término de ley para el ejercicio de su defensa.

VI. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política es un mecanismo judicial de naturaleza excepcional cuyo objetivo radica en la protección y defensa de los derechos fundamentales cuando los mismos se ven amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente señalados en la Constitución y la ley.

Este despacho es competente para conocer y decidir el trámite de la acción propuesta acorde con los lineamientos que sobre la materia ha definido el artículo 86 Superior y 37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017.

El trámite de la acción atendió integralmente lo dispuesto por el Decreto reglamentario 2591 de 1991, de modo que con el auto admisorio se ordenó la notificación de la accionada, se solicitaron los informes del caso acorde con lo dispuesto por el artículo 19 de dicha codificación. Ha de tenerse descontando que la entidad accionada indicó que el 7 de abril hogaño atendió la petición del accionante, por lo que solicitó denegar el amparo por hecho superado.

Ahora bien, el derecho de petición está consagrado como fundamental en el artículo 23 de la Carta Política y desarrollado a partir de la Ley 1437 de 2011, modificada por la ley 1755 de 2015, la cual se ocupa de regular los términos con que cuenta la administración para dar resolución efectiva a las solicitudes de los ciudadanos.

Ha puntualizado la H. Corte Constitucional¹: *"En conclusión el derecho fundamental de petición garantiza que cualquier persona pueda elevar ante la administración pública o un particular con funciones públicas una solicitud, que deberá resolverse de fondo en un término específico y de manera congruente con lo que solicita, sin importar si la información resulta o no favorable a lo pedido"*. En otro pronunciamiento, recalcó el alto tribunal: y en lo que hace a la respuesta integral, completa y coherente de las peticiones dirigidas por los ciudadanos ha sostenido la H. Corte Constitucional²: *"La garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.."*

Con base en estas premisas, y en análisis de los informes allegados por las accionadas, cabe señalar que si bien la comunicación No. 2021EE0050750, de la Contraloría General de la República, recoge los puntos de la consulta elevada por el señor JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS, lo cierto es que su envío no se acreditó, de modo que no se acompañó la constancia de la empresa postal o certificación de entrega electrónica que evidencie la respuesta efectiva y con ello no cabe razonar en la garantía del derecho reclamado por el interesado, quien espera de la administración una respuesta cierta a su pedimento, la cual no se observa a partir del anexo objeto de análisis, de donde se impone tutelar el derecho de petición al solicitante y en consecuencia impartir las órdenes del caso.

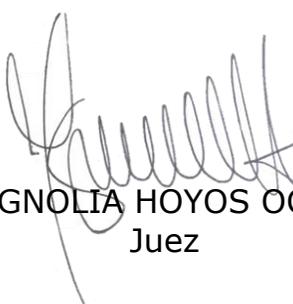
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: Tutelar el derecho de petición a JOAN SEBASTIÁN MÁRQUEZ ROJAS, identificado con c.c. 1.094.879.565 y en consecuencia se ordena al Director, Representante Legal o a quien haga sus veces de la Contraloría General de la República, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, acredite la respuesta efectiva a la petición radicada el 12 de febrero de 2021, misiva que deberá dirigirse por el medio más expedito al interesado.

SEGUNDO: Notificar esta providencia por el medio más expedito a las partes.

TERCERO: En caso que la presente providencia no fuere impugnada, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión atendiendo lo dispuesto por la Circular PCSJC20-29 en concordancia con el artículo 1 del Acuerdo PCSJA-20-11594 del CSJ.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


MAGNOLIA HOYOS OCORÓ
Juez

¹ Corte Constitucional, sentencia T-013 de 2008

² sentencia T-149 de 2013